

# **LA FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL**

Prof. Doctora María Milagros Sieiro Constenla  
Economía Aplicada  
Universidad de A Coruña

## **GUIÓN**

I.- LA PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL EN EL DERECHO COMUNITARIO.

II.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Y LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL

III.- LA INSTRUMENTACIÓN FISCAL DE LA PROBLEMÁTICA ECOLÓGICA

IV.- LAS BASES DE LA IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL

V.- LA IMPLANTACIÓN DE UN IMPUESTO ECOLÓGICO EN LA UNIÓN EUROPEA.

VI.- LA FISCALIDAD AUTONÓMICA EN MATERIA AMBIENTAL: SU APLICACIÓN EN GALICIA.

VII.- CONCLUSIONES

## **I.- LA PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL EN EL DERECHO COMUNITARIO.**

En los tratados originarios de la Unión Europea no se tiene en cuenta al medio ambiente, únicamente tras la conferencia de Estocolmo de 1972 se pone de manifiesto la importancia de una política ambiental en la Comunidad Europea. Política que se articuló mediante programas de "acción", que se llevaron a la práctica mediante normas de Derecho Comunitario Derivado, especialmente mediante directivas, que solo obligan en cuanto a resultados, y dejan a las autoridades nacionales la elección de formas y medios. En el Tratado de la Unión Europea de 1992, se le otorga mayor importancia y aparecen en el título XVI los artículos 130R, 130S y 130T, de forma que la cuestión medioambiental ha pasado a ser un área con sustantividad propia dentro del derecho de la CEE.

El artículo 130R TCEE habla de acción y no de política en materia de medio ambiente:

1.- La acción de la Comunidad por lo que respecta al medio ambiente tendrá por objetivo:

- Conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente.
- Contribuir a la protección de la salud de las personas
- Garantizar la utilización prudente y racional de los recursos naturales.

2. La acción de la Comunidad, en lo que respecta al medio ambiente, se basará en los principios de la acción preventiva, de corrección preferentemente en la fuente de los ataques al medio ambiente y de quien contamina; paga. Las exigencias de la protección del medio ambiente serán una exigencia del resto de las políticas de la Comunidad.

3.- En la elaboración de la acción en relación con el medio ambiente, la Comunidad tendrá en cuenta:

- Los datos científicos y técnicos
- Las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones
- Las ventajas y cargas que puedan resultar de la acción y de la falta de acción.
- El desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones.

Aunque en el apartado segundo de dicho artículo se reconoce el carácter de política de la actuación ambiental de la Comunidad, sin embargo no parecen más que una lista de objetivos genéricos en vez de detallada, y se constata la existencia de una limitación derivada de que la acción medioambiental no deberá interferir en la política nacional de explotación de los recursos energéticos.

La subsidiaridad de la política medioambiental se constata en el hecho de que se subordina la acción de la Comunidad a la acción individual de los estados miembros.

La consagración de la actuación formal como política se produce en la revisión operada por el TUE en el TCEE, mediante el cual se termina la subordinación de las políticas ambientales a consideraciones puramente económicas.

En el preámbulo del TUE expone entre los objetivos de la UE un crecimiento económico sostenible, de igual forma en el TCE, artículo 2, se señala que ese crecimiento debe respetar el medio ambiente. Así en el artículo 3, se establece que para cumplir el artículo 2 debe elaborarse una política medioambiental y en el nuevo artículo 130R TCE se añade a los objetivos del 130R originario el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.

En el artículo 130S TCE se advierte que los Estados Miembros, sin perjuicio de determinadas medidas de carácter comunitario, tendrán a su cargo la financiación y la ejecución de política en materia de medio ambiente. Este artículo entra en confrontación con el artículo A del TUE, a tenor del cual “las decisiones serán tomadas de la forma más próxima posible a los ciudadanos”. Es por ello que la política ambiental comunitaria no ha alcanzado el grado perfección necesaria para servir eficazmente a la protección ambiental, la legislación ambiental protege elementos no considerados de interés económico, con lo que ciudadanos tienen dificultades para recurrir a los tribunales, aunque la inclusión de algunas disposiciones ha provocado que algunos ciudadanos hayan obtenido sentencias favor; obligando a los Gobiernos de los Estados a respetar la legislación europea medioambiental.

A parte de la constitucionalización del medio ambiente europeo está el V Programa Comunitario de política medioambiental que la adapta a la cumbre de Río, a las nuevas exigencias del mercado y a la internacionalización de los problemas ambientales. El programa contempla cuatro grandes objetivos:

- El respeto de los recursos naturales.
- Cambios en las pautas de comportamiento de los ciudadanos que supuso excesos en el uso de los recursos naturales

- Participación en el seguimiento de los programas por los representantes directos e indirectos de la sociedad.
- La ampliación de los medios de actuación más allá de la legislación.

A estos efectos se han seleccionado cinco sectores en los que introducir las correcciones más importantes: Industria, Energía, Transporte, Agricultura y Turismo.

Con relación a los nuevos instrumentos, señalan la traslación de los costes ambientales precios, aplicación de instrumentos horizontales de apoyo, y por ultimo, los instrumentos financieros, donde cobran especial importancia los fondos de cohesión y su aplicación a proyectos de tutela ambiental.

Junto a los programas de actuación comunitaria, el Tratado Constitutivo, el Acta Única y el Tratado de Maastricht, la Comunidad Europea ha dictado una infinidad de Reglamentos, Directivas, Decisiones y reglas de todo tipo en relación con el medioambiental.

Por otra parte, resulta evidente que el principio “quien contamina paga”, es uno de los principios rectores del Derecho Comunitario del medio ambiente, incorporado en el artículo 130R TCE por el Acta Única Europea

A tenor del mismo, las personas físicas o jurídicas responsables de una contaminación deberán pagar los gastos de las medidas necesarias para evitar la contaminación o para reducirla. Para la puesta marcha del principio el instrumento básico son las normas, que pueden ser:

- De calidad ambiental. Establecen niveles de contaminación que no deberán sobrepasarse en un medio
- Normas de producto: señalan la contaminación, composición o diseño de un determinado producto.
- Normas aplicables a las instalaciones fijas, las cuales se subdividen en:
  - Normas de emisión.
  - Normas de concepción de construcción
  - Normas de explotación.

El principio, no obstante, no especifica la medida económica a adoptar, pudiendo ser estas: Multas, indemnizaciones, ventajas económico financieras, fianzas, títulos

contaminadores y tributos, siendo estos últimos el espíritu del principio, a través de cuales se pretende conseguir una fuente de recursos con los que incentivar medidas y técnicas mas ecológicas.

Por otra parte, este principio no constituye una autorización a deteriorar el medio ambiente a cambio de un precio. Su objetivo último es el de internalizar los costes sociales derivados del perjuicio medioambiental. El cumplimiento estricto de este precepto exigiría la concurrencia de tres condiciones:

- Los agentes contaminantes serían los sujetos pasivos de un impuesto que debería estimularles a invertir en tecnologías respetuosas con el bien ambiental.
- En la estructura del citado impuesto, debe guardarse una relación proporcional entre la capacidad contaminante y el pago a realizar por el sujeto pasivo. Así, surge el problema de cuantificar el daño al medio ambiente.
- En un principio resultaría inaceptable establecer ayudas públicas para la reconversión hacia tecnologías limpias por el principio de solidaridad, sin embargo con el principio de *quien contamina paga* esto no sucedería en aquellos supuestos en los que los beneficios fiscales se orientasen a compensar los esfuerzos ecológicos del sujeto pasivo que por razones técnicas no hayan producido la esperada reducción de las emisiones contaminantes

## **II.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Y LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL**

La normativa ambiental en España es en gran medida resultado de la transposición de directivas comunitarias a través de normas de derecho interno. Por otra parte, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales tienen atribuidas competencias en la materia. La Constitución Española de 1978 en su artículo 45 impone a los poderes públicos el deber de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, así como defender y restaurar el medio ambiente. Se configura así el medio ambiente como un derecho colectivo, de forma que podemos definir los bienes ambientales como bienes colectivos no patrimoniales ya que prestan servicios indivisibles a favor de la colectividad, dado que en relación a sus beneficiarios no se pueden ni medir ni ordenar.

El referido artículo 45 prevé una cláusula de carácter indemnizatorio por la que se obliga al que vulnere el uso racional de los recursos a reparar el daño causado. En definitiva, el deber de contribuir al gasto público quedaría traducido en que quien contamina debe pagar, en proporción al deterioro real o potencial, en cuantía suficiente para hacer frente protección y corrección en la fuente del gasto publico que se produce.

La adhesión a la Unión Europea ha supuesto la aceptación de una legislación de medio ambiente, mucho más exigente que la que se tenía en anterioridad.

El Estado tiene competencia exclusiva para promulgar legislación básica sobre la protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales. Así pues, es el Estado quien dicta las normas básicas de contenido y de aplicación general, quedando la aplicación y puesta en practica de esas normas y su desarrollo normativo a cargo de las autoridades autonómicas y locales.

El esquema competencial viene configurado de acuerdo con lo siguiente:

- Administración Europea: Adoptar Programas de Acción General (PACMAS). Promulgación de actos normativos (Fundamentalmente Reglamentos y Directivas).
- Administración Central: Legislación Básica sobre protección del medio ambiente. Legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Legislación, ordenación, concesión de recursos y de aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, Planificación. Comercio Exterior y Relaciones Internacionales.
- Administración Autonómica: Desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica estatal. Normas adicionales de protección. Ordenación de territorio, urbanismo y vivienda. La gestión en materia de medio ambiente. Montes, agricultura y ganadería.
- Administración Local: Establecimiento de criterios y servicios de protección del medio ambiente, a través de la redacción de ordenanzas municipales. En general, los municipios tienen atribuidas competencias en recogida de sólidos urbanos, abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

### **III.- LA INSTRUMENTACIÓN FISCAL DE LA PROBLEMÁTICA ECOLÓGICA**

Generalmente, la solución de problemas de carácter ambiental requiere de un tratamiento interdisciplinario: todos los instrumentos jurídicos son necesarios pero insuficientes.

La Constitución de 1978 vértebra el Estado español en unidades territoriales de gobierno tales como las Comunidades Autónomas, a las cuales reconoce implícitamente un ámbito financiero propio. Explícitamente se reconoce la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas mediante un sistema de recursos propios como impuestos, cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado, impuestos propios, tasas, contribuciones especiales, transferencias del Fondo de Compensación interterritorial, rendimientos del patrimonio e ingresos de derecho privado.

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre de Financiación de Comunidades Autónomas, señala que las CCAA pueden establecer y exigir sus propios tributos, es decir autonomía en el campo fiscal, aun cuando existen ciertas limitaciones provenientes de esta Ley como de la Constitución Española. En definitiva, las Comunidades Autónomas tienen plena capacidad para crear tributos medioambientales con el único límite de la requerida coordinación, en cambio, en el caso de las Corporaciones Locales la potestad para establecer y exigir tributos esta contrapesada por su carencia de potestad legislativa.

La presencia de instrumentos económicos, especialmente de carácter fiscal, se ha ido incrementado en los últimos años, introduciéndose en el sistema fiscal a través de la creación de nuevos tributos medioambientales o adaptando las estructuras fiscales existentes a objetivos medioambientales.

Estas exacciones tienen como objeto el desanimar conductas contaminadoras y el distribuir los costes ecológicos y económicos que suponen la creación de instalaciones para evitar daños. En España, se plantea la dificultad de armonizar las competencias y potestades tributarias entre los tres niveles de administración existentes.

Las técnicas económico-jurídicas deben buscar soluciones al problema medioambiental, entendiéndose por tal medio un concepto de desarrollo sostenible, que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

Hay dos tipos de mecanismos de conciliación entre los procesos de producción y la defensa del medio ambiente:

a) Mecanismos de mercado:

- Cánones: Son un precio a pagar por contaminar, son a la vez incentivos y fuente ingreso.

- Ayudas financieras: Incentivos y financiación de la reducción de la contaminación.



- Sistemas de Consignación: Sobrecarga en el precio de productos potencialmente contaminantes, que se reembolsa cuando se cumplen ciertas condiciones.
- Creación de mercados de transferencia de derechos de contaminación y/o transferencia las compañías de seguros de los riesgos derivados de la contaminación.
- Impuestos.

b) Regulaciones Directas: Conllevan un esfuerzo de la Administración en poseer y manejar enorme masa de información sobre los costes y las circunstancias propias de cada uno de los agentes.

Particularmente, los instrumentos fiscales sirven para prevenir y reprimir conductas no deseables, disuadir, estimular o compensar las acciones de los sujetos que inciden en el medio. Con ellos se persigue la reasignación de los recursos en orden a conseguir el desarrollo sostenido, incorporando a las actividades económicas los costes sociales y medioambientales totales. Existen dos grandes grupos de instrumentos: Los tributos verdes por medio de los cuales el ente público consigue recursos que luego reinvierte en el medio ambiente y los incentivos fiscales por medio de los cuales son los propios ciudadanos los que se benefician de determinadas cantidades por satisfacer los objetivos marcados por las administraciones.

Dentro de las medidas económicas se incluyen no solo los impuestos o cánones, sino también las desgravaciones y ayudas financieras desde el punto de vista del gasto público.

- Cánones Tienen por objeto incitar al responsable de la contaminación que adopte, por propia iniciativa, con el menor coste, las medidas necesarias para reducir la contaminación de que sea causante y que se haga cargo de su participación en los gastos de medidas colectivas. La recaudación debería destinarse al medio ambiente.

El canon carece de sustantividad propia, y aun cuando su naturaleza tributaria es indudable, cuando reúne los requisitos de obligación fundada en la ley sin naturaleza sancionadora y financiación del gasto público, no se puede entender como una cuarta categoría de tributo junto a los impuestos, tasas y las contribuciones especiales.

En los cánones el contaminador obtiene una ventaja proporcional a la suma pagada, mientras que en los impuestos no hay ventaja directa alguna.

- Tasas: Son tributos ambientales redistributivos. No sirven como instrumento de política medioambiental. Es más bien una medida correctora.

- Contribuciones especiales: Son unos métodos esenciales para corregir la contaminación, en cuanto distribuyen los costes entre los agentes contaminantes para la depuración, destinados a compensar la aportación del Estado y los gastos de explotación y conservación de las a de saneamiento y sufragar las externalidades negativas que conlleva su uso. El uso de contribuciones por parte de los legisladores ha sido, sin embargo, escasa. Su naturaleza jurídica es de tributo parafiscal, pues no tienen naturaleza presupuestaria, no se encomienda su gestión a la Administración y están afectas a un fin determinado.

- Impuestos. Se inscriben en los instrumentos de política medioambiental, pretenden mediante la introducción de un coste evaluable en términos de valor de cambio sobre la actividad, un sector económico o un insumo, modificar el comportamiento de los agentes conduciéndoles hacia finalidades más aceptables ecológicamente hablando.

Los impuestos no son los únicos mecanismos aplicables como instrumentos medioambientales, aunque si son los preferidos puesto que suscitan la reacción del ciudadano que los soporta y le hace adquirir conciencia y responsabilidad al respecto.

Al hablar de medidas tributarias, nos solo se hace referencia al tributo en su concepto jurídico - técnico, sino a fórmulas más generales de gravámenes establecidos por el publico.

Como razones para el uso de tributos medioambientales tenemos:

1. Son eficaces para internalizar externalidades.
2. Pueden proporcionar incentivos para promover cambios de comportamiento tanto en como en el consumidor, concienciarlos de que de lo que se trata es evitar que los daños se produzcan, y ya no tanto de compensar daños causados.
3. Pueden incrementar la renta fiscal que se puede usar para gastos en medio ambiente para la reducción de otros impuestos sobre el empleo, capital y ahorro.
4. Son eficaces para abordar las políticas medioambientales actuales a partir de fuentes de contaminación difusas como las emisiones de medios de transporte. Se reparte entre el mayor numero de agentes el coste de las instalaciones necesarias para evitar daños ambientales.

- Incentivos fiscales: Están en auge. Pueden venir incluidos en la normativa de los tributos medioambientales, se regulan mediante exenciones, bonificaciones y deducciones.

No suelen tratarse de incentivos para inversiones anticontaminantes, sino para la adquisición de equipos para la reducción de emisiones que dejan entrever la búsqueda de no solo de objetivos medioambientales, sino la existencia de múltiples objetivos, como de política industrial, de empleo o de balanza de pagos.

#### **IV.- LAS BASES DE LA IMPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL**

Un impuesto ecológico plantea se enfrenta esencialmente a dos grandes problemas de definición básica:

- En que medida es admisible constitucionalmente, dado que no tienen en cuenta con carácter primordial el principio de capacidad económica
- La fijación de la cuantía exacta con la que el sujeto debe contribuir.

Pese a estos inconvenientes se considera la posibilidad de un impuesto por su universalidad y por sus efectos generalizados sobre la población. Un impuesto ecológico debe ser sectorial.

Según el Tribunal Constitucional, el impuesto debe basarse en el principio de capacidad económica. Que a los tributos se les asigne una finalidad extrafiscal, hoy en día no constituye una cuestión de mayor discusión, puesto que el sistema tributario es considerado un instrumento para la consecución de unos determinados fines económico - sociales.

La configuración jurídica de un tributo puede tener en cuenta tanto el principio de capacidad económica como otros principios orientadores. Así, se pueden establecer exenciones para orientar comportamientos de los ciudadanos hacia la preservación y mejora del medio ambiente, pueden establecerse tributos que graven situaciones relacionadas con el medio ambiente, para obtener recursos que se destinaran en general a compensar los costes provocados y desincentivar la actividad degradadora del medio ambiente, incentivando actitudes positivas.

¿Resulta admisible un impuesto cuyo hecho imponible sea la actividad contaminadora?

En las tasas y en las contribuciones especiales hay contraprestación con lo que no plantear ningún problema, pero en el caso de los impuestos no hay contraprestación, y nos encontramos con el problema de la capacidad económica y la cuestión de la medida en que cada individuo debe contribuir.

El objeto del tributo se configura en base a la existencia de capacidad contaminante real potencial, que indica capacidad económica. Estamos ante una prestación patrimonial coactiva de carácter público que presente; formalmente naturaleza tributaria, podría encuadrarse entre los impuestos de ordenamiento o extrafiscales cuya legitimación y justificación se encuentra en el principio "quien contaminó paga", que sirve como soporte al criterio de capacidad económica patrimonial que fundamenta, en base a la solidaridad colectiva, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que genera la recuperación y restablecimiento del medio ambiente dañado.

## **V.- LA IMPLANTACIÓN DE UN IMPUESTO ECOLÓGICO EN LA UNIÓN EUROPEA.**

En la Unión Europea se ha estudiado seriamente la expansión de tributos medioambientales. La propuesta inicial es la creación de un impuesto general finalista de carácter medioambiental. Se pretenden gravar los consumos energéticos con un tributo especial que toma en consideración sus virtualidades ambientales y discrimina gravosamente a las más perjudiciales o a las aplicaciones más contaminantes. El objetivo final sería la implantación de un tributo internacional sobre combustibles fósiles que financie fuentes más limpias y que ayude a los países menos desarrollados a disminuir los aportes. No obstante, tal pretensión ha sido frenada por la crisis de los precios energéticos.

No obstante se insta a los países miembros al uso de instrumentos fiscales en sus políticas medioambientales. Se ha presentado por la comisión y como objetivo irrenunciable, la creación de un impuesto especial y armonizado sobre las emisiones de carbono y consumo de energía.

La implantación de un tributo ecológico puede considerarse desde tres puntos de vista:

- Sociológico: La adopción se mueve en la tensión de cuatro focos políticos: asociaciones ecologistas, la industria, los estados del sur y los estados del norte.
- Económico: La interposición desordenada de diferentes tributos en diferentes estados miembros provocaría perturbaciones en el mercado único, provocando en algunos casos pérdida de competitividad en la industria europea.
- Jurídico: La política medioambiental comunitaria se construye mediante programas de acción, refrendándose en el Acta Única Europea.

El procedimiento de la adopción de un impuesto ecológico habrá de pasar por la unanimidad del consejo.

Los principios rectores de un impuesto ecológico han de ser los siguientes:

- Armonización: Los criterios para la adopción de un tributo ecológico deben ser homogéneos.
- Subsidiariedad: La propuesta del impuesto ecológico diseña un modelo de protagonismo estatal. El impuesto afectaría a la mayor parte del consumo energía que presenta innumerables variables en los distintos estados miembros.
- Neutralidad: No debe suponer un incremento de la carga fiscal, ni directa ni indirecta. Se debería construir aliviando la tributación de otras fuentes de riqueza. Tampoco debería incrementar la carga de trabajo de las administraciones actuales.
- Competitividad: Para no perjudicar la competitividad de la industria europea, no se podrá aplicar hasta que otros países de la OCDE dispongan medidas similares.
- Afectación: La afectación de los ingresos generados por el tributo al fin pretendido tiene al menos tres razones en contra:
  - Derivadas de las características del impuesto, que trata de modificar conductas y no de recuperar el coste de una actividad pública descontaminante.
  - El previsible volumen recaudatorio que generaría.
  - La dificultad de ordenar presupuestariamente la afectación.

Por otra parte, la configuración sustantiva del tributo vendría determinada por lo siguiente:

- El objeto imponible. El objeto sobre el que descansa el impuesto ecológico es la emisión de dióxido de carbono. En este impuesto la riqueza última que soporta la imposición es la manifestada por el destinatario último el bien.
- El hecho imponible. Desde la experiencia comparada de la Comunidad Europea podemos señalar los siguientes supuestos potenciales de un hecho imponible ecológico:
  - Emisión, afluentes y vertidos: Su principal aplicación se da en la conservación del agua, según la OCDE no es efectivo un tributo de este tipo.

- Agua: Tiene tres objetivos, mantener un adecuado nivel de calidad, impedir la acumulación de compuestos peligrosos en el subsuelo y evitar alteraciones perjudiciales del recurso y del ambiente en el que se relaciona.
- Aire: Es de muy difícil control y tratamiento.
- Residuos sólidos: Se persigue la minimización de esta corriente, procurar su reciclaje y eliminación de lo no recuperable.
- Ruido: Debe ser un impuesto de amplio alcance superando la esfera local
- Espacios Naturales y paisajes: Protección de determinadas especies de flora y fauna, la concepción de naturaleza agraria y la necesidad de su protección, y la vinculación de los proyectos de obras públicas sobre el medio natural.
- Exenciones. Son muchas y por ello es preciso acudir al texto original. Se subdividen en:
  - Subjetivas, debidas en su mayoría al respeto de compromisos internacionales, el procedimiento para hacerlas efectivas sería la devolución del impuesto satisfecho una vez acreditado el destino del producto.
  - Objetivas. Vinculadas a la obtención de pequeñas cantidades o a su autoconsumo.
  - Temporales. Se prevé con carácter extraordinario un régimen de suspensión temporal en la aplicación del impuesto.
  - Sujetos pasivos El impuesto será devengado por las personas que efectúen una operación imponible, Será el estado el que ordene el devenir subjetivo del impuesto.
  - Elementos cuantitativos. Los elementos de cuantificación varían en función del producto de que se trate, no estando prevista la posibilidad de que la carga varíe de un estado a otro en función de las emisiones relativas.

## **VI.- LA FISCALIDAD AUTONÓMICA EN MATERIA AMBIENTAL: SU APLICACIÓN EN GALICIA.**

El Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado por la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, no desaprovechó la ocasión para plasmar en su artículo 27.30 el deseo de la Comunidad Autónoma Gallega de asumir como competencia “exclusiva” *las normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje*

De este modo se cumplía la primera condición para que Galicia pudiese legislar *Ad futurum* sobre la referida materia. Sin embargo, restaba por averiguar si podría hacerlo utilizando instrumentos fiscales. Tal duda fue despejada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987, de 26 de marzo, cuyo Fundamento Jurídico 13º declaró que “la Constitución concede autonomía financiera a las Comunidades Autónomas para el desarrollo y ejecución de sus competencias, lo que permite admitir la facultad de aquellas para utilizar también el instrumento fiscal – como parte integrante de su autonomía financiera – en la ejecución y desarrollo de todas las competencias que hayan asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía y respecto de los cuales dicha utilización sea necesaria.

Al hilo de esta habilitación, la Ley 8/1993, de 23 de junio, reguladora de la Administración Hidráulica de Galicia, creó en su artículo 33 un Canon de Saneamiento, siendo éste objeto de desarrollo normativo por el Decreto 27/1996, de 25 de enero.

El hecho imponible de este tributo viene dado por la producción de vertidos de aguas y de productos residuales, realizados directa o indirectamente por el consumo o por la utilización potencial o real de agua de cualquier procedencia. Se contemplan, como supuesto de delimitación negativa del hecho imponible, tres supuestos de no sujeción:

- Suministros en alta a servicios públicos de distribución de agua potable.
- .- Alimentación de fuentes públicas o monumentales, bocas de riego y extinción de incendios a cargo de entidades públicas.
- Utilización de agua para el uso de riego agrícola.

La base imponible del Canon puede cuantificarse utilizando un doble mecanismo de medida: volumen de agua consumida durante un período determinado o unidades de contaminación producidas, si se acude a la determinación directa de la carga contaminante.

Desde el punto de vista de la gestión, puede adoptar dos modalidades según que el consumo proceda o no de captaciones propias del sujeto que realiza el vertido contaminante. En este segundo supuesto, el tributo será exigido por la entidad o compañía suministradora al contribuyente – consumidor. Por el contrario, si la utilización del agua que genera los vertidos procede de captaciones o aprovechamiento propios del contribuyente opera el esquema tradicional de liquidación, esto es, la presentación periódica de declaraciones de consumo.

Por otra parte, la Ley 12/1995, de 29 de diciembre, creó el Impuesto sobre la Contaminación Atmosférica, promulgándose a posteriori Decreto 4/1996, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del citado tributo.

El Hecho imponible del tributo viene dado por la emisión a la atmósfera de cualquiera de las siguientes sustancias. A) Dióxido de azufre o cualquier otro compuesto oxigenado de azufre, y b) Dióxido de nitrógeno o cualquier otro compuesto oxigenado de nitrógeno.

El sujeto pasivo serán los titulares de las instalaciones o actividades que emitan sustancias contaminantes gravadas.

La base imponible es una base expresada en unidades monetarias ya que se cifra en toneladas anuales de gases expulsados a la atmósfera.

La cuota tributaria se determina mediante la aplicación de una tarifa configurada por tramas de forma que la cuota se incrementa a medida que aumenta la cantidad de toneladas de gases expulsados

Desde el punto de vista de la gestión el sujeto pasivo ha de presentar dos tipos de declaraciones: a) Una autoliquidación mensual referida a la base imponible acumulada a lo largo del año y b) Una declaración resumen anual.

## **VII.- CONCLUSIONES**

Partiendo de la base que los tributos medioambientales no deben tener la finalidad de financiación de los gastos públicos, podemos indicar las directivas esenciales a las que debe responder su implantación:

1º Los impuestos ecológicos son "no financieros".

2º Deben clasificarse dentro de los gravámenes finalistas.

3º Debe establecerse con "arreglo a la ley"

4º El impuesto ecológico no tiene porque fundamentarse en el principio de capacidad económica.

5º Hay de considerarse como figuras afines, los impuestos no ecológicos que mediante exenciones y desgravaciones cumplan los fines de un impuesto ecológico.

6. El impuesto ecológico debe establecerse bajo el signo de lo temporal.



7. Cuando las causas determinantes de un impuesto ecológico desborden las líneas territoriales de la entidad pública que lo haya implantado, debe lograrse el correspondiente ámbito espacial mediante la coordinación.
8. Para que la incidencia efectiva del impuesto sirva los fines asignados, la teoría especial del impuesto que se ocupa de la incidencia económica, ha de estar presente en la regulación de cualquier impuesto ecológico.
9. La recaudación de un impuesto medioambiental, será aplicada a los fines por el perseguidos, pero nunca a otras aplicaciones que habrán de ser financiadas con recursos generales.